

dos Códigos: la posibilidad o no de levantar un impuesto sobre los estipendios de Misas; la posibilidad de cuestaciones; las cauciones que han de dar los administradores de bienes eclesiásticos (CCEO, c. 1207); la erección de fundaciones pías autónomas por el Obispo eparquial (CCEO, c. 1048 § 1); la delegación para reducir las cargas para la celebración de la Divina Liturgia (CCEO, c. 1052 § 6).

Los procesos en general están contemplados en el siguiente capítulo (pp. 209-249). Se pregunta el autor hasta qué punto se puede decir que las normas del Código oriental son realmente acordes con las del Código latino, como el Legislador deseaba. Luego pasa a examinar las pocas normas del Código latino que no tienen correspondencia en el Código oriental, y da la razón de ello, y, al revés, una decena de normas específicas del CCEO. Se detiene finalmente en ocho normas para las cuales encuentra divergencias notables entre ambos Códigos.

El penúltimo capítulo se centra en el proceso contencioso (pp. 251-278). Este estudio es debido a la existencia del canon 1102 § 1 CCEO, a tenor del cual los jueces y demás ministros de los Tribunales pueden escogerse incluso en una Iglesia de derecho propio (o *sui iuris*), o sea incluso en la Iglesia latina. De ahí la importancia de que el canonista latino llamado a intervenir tanto en un tribunal latino como en un tribunal oriental conozca bien las diferencias existentes entre los dos cuerpos legales. El Profesor Abbass empieza por dibujar el *iter* de los cánones orientales, para ver hasta qué grado respetan la conformidad deseada con sus homólogos latinos. Estudia entonces las normas específicas de ambos Códigos, y aquellas que, a pesar de ser comunes, presentan sustanciales diferencias.

La conclusión alude a la utilidad de los estudios comparativos (pp. 279-294). Está claro, escribe el autor, que los llamamientos del Romano Pontífice a promover un conocimiento adecuado del único *Corpus Iuris Canonici* no eran fortuitos. Dicho conocimiento se revela de gran importancia práctica. Por otra parte, considerar los dos Códigos como dos cuerpos aislados no relacionados el uno con el otro sería un error: de hecho, el Legislador ha establecido explícitamente algunos casos en los que los dos Códigos se encuentran estrechamente vinculados. Además, siempre en el marco de un enfoque comparativo del único *corpus* canónico, los dos Códigos se prestan mutuamente vida y aliento.

Esta obra, que se cierra con la lista de los cánones citados (pp. 295-303), pide que otros estudios salgan a la luz. Por una parte, porque no pretendía el autor llevar a cabo un estudio exhaustivo. Por otra parte, porque se puede decir que ha trazado una vía por la que hay que seguir. Esta continuación sería lógica. Finalmente no está de más agradecer al Profesor Abbass el trabajo que ha cumplido, que subraya que el título de *Iuris Canonici Doctor* tiene que responder a un auténtico conocimiento de la *universæ Ecclesiae ordinatio canonica*, bajo pena de limitarse a ser un título de *Iuris Canonici Orientalis Doctor* o de *Iuris Canonici Latini Doctor*.

DOMINIQUE LE TOURNEAU

Eduardo BAURA, *La dispensa canonica dalla legge*, Giuffrè, Milano 1997, X+287 pp.

La reflexión doctrinal sobre la dispensa constituye una especie de cruce de caminos, cuya travesía ha dado pie, a lo largo de los siglos, a las consideraciones

más variadas, según las preocupaciones prioritarias en cada momento de la ciencia canónica. En época reciente, el estudio de la dispensa como institución ha sido ocasión para plantear, con pretensión más o menos marcadamente eclesiológica, cuestiones de alcance tan variado como las relaciones entre derecho canónico y fin de la Iglesia, derecho y pastoral, bien común y bien particular, potestad suprema e Iglesia particular; o, en perspectiva más técnica, seguridad jurídica y ejercicio prudencial de la potestad, legalidad y gobierno, flexibilidad del derecho e igualdad... No raramente, la dispensa ha venido a ser presentada como una pieza contradictoria, discordante, del sistema, para bien o para mal, según las concepciones.

El autor de esta monografía justifica su decisión de acometer un nuevo estudio sobre esta materia por los nuevos elementos introducidos en el régimen vigente, que suscitan —afirma Baura— el interés de volver a examinar las viejas cuestiones sobre la dispensa, en una perspectiva jurídica y teniendo en cuenta la normativa en vigor (cfr. p. 2).

El estudio se divide en dos partes bien diferenciadas, aunque no expresamente en el índice: antecedentes históricos y análisis de la institución en el derecho vigente.

Los tres primeros capítulos (I. L'Origine della dispensa canonica; II. Lo sviluppo storico dell'istituto dispensatorio; III. La codificazione canonica e la dispensa) dan razón de los principales hitos en la historia de la dispensa, desde sus orígenes meramente prácticos hasta la consolidación del concepto ya en la doctrina decretista; y de la evolución posterior de la institución, tanto en la doctrina como en su régimen jurídico en las

dos sucesivas codificaciones. El autor consigue admirablemente algo tan difícil como el equilibrio entre el rigor histórico y la fluidez al presentar la evolución de la institución jurídica. La clave está en la acertada identificación de los aspectos que sirven de hilo conductor para ir siguiendo los momentos verdaderamente significativos de esa evolución, sin incurrir en simplificaciones y apuntando con claridad el abanico de cuestiones doctrinales implicadas en cada uno de ellos.

Esta primera parte permite al autor establecer una plataforma sólida de antecedentes y referencias conceptuales para iniciar el análisis de la institución tal como queda delineada en el derecho canónico vigente, con sus dos principales novedades: la inclusión de la dispensa en el régimen de los actos administrativos y la competencia general de los obispos para dispensar de las leyes universales, salvo reserva expresa.

El estudio de la dispensa en su régimen vigente se articula en otros tres capítulos: IV. I profili canonici della dispensa; V. La dispensa ed altri istituti affini; VI. L'atto dispensatorio. Las cuestiones de fondo a las que se intenta aportar luz con ese análisis están, de nuevo, bien elegidas: si hay continuidad entre la figura actual de la dispensa y la configurada en la tradición canónica; y si, teniendo en cuenta la naturaleza de la dispensa —*ex natura rei*—, el régimen jurídico vigente puede considerarse adecuado.

Me parece muy importante para el resultado final la fijación del punto de partida que hace el autor en p. 128: «Il codificatore del 1983 (...) ha voluto descrivere, sia pure con somma brevità, ma con la forza vincolante propria della legge, gli elementi essenziali dell'istituto

che ha regolamentato con il nome di "dispensa". La riflessione dottrinale sulla dispensa deve, pertanto, partire da questa nozione legale, vale a dire, che la natura giuridica della dispensa non la si deduce astraendo gli elementi comuni dei fenomeni riconducibili, più o meno direttamente, alla "misericordia" o all' "economia", ma, al contrario, raffrontando questi fenomeni con il tipo di dispensa legalmente descritto, al fine di accertare se sia possibile e in quale misura applicare ad essi la normativa della dispensa». Esta precisión, que a mi juicio nada tiene que ver con un análisis positivista del derecho, permite prevenir el riesgo de extrapolaciones poco rigurosas, que acabarían por difuminar los contornos precisos de una institución jurídica que opera en la experiencia jurídica de la Iglesia con la eficacia propia de la dispensa.

La tesis del autor, en síntesis, afirma que la dispensa de la ley es una institución jurídica que no cabe confundir con una idea genérica de «economía» —la «oikonomía» oriental—, sin perjuicio de que se trate de un instrumento que canaliza en la experiencia jurídica una actividad que, en último análisis, podría reconducirse a la «economía» (p. 145, nota 31). De ahí que no quepa establecer una relación estricta de dependencia entre la dispensa y las llamadas «peculiaridades del derecho canónico» o los imperativos teológicos de la naturaleza de la Iglesia. Hasta tal punto es así, que Baura la considera una institución perfectamente adaptable a la experiencia de otros ordenamientos jurídicos (ibid.).

Sobre la pauta del régimen vigente y en directa relación con él, el autor va replanteando con lucidez los puntos históricos de discusión doctrinal, y otros de reciente origen, acerca de la dispensa;

dialoga ponderadamente con las diversas posiciones doctrinales y ofrece sus propias conclusiones, a veces con especial brillantez —pienso, por ejemplo en las páginas sobre la dispensa del derecho divino, o en las dedicadas a la distinción entre dispensa y otras instituciones afines—; y siempre suscitando el deseo de continuar la conversación.

Son muchos los pasajes que me han interesado especialmente, y más de uno me ha provocado ulteriores preguntas y también réplicas. Evidentemente no es este el momento ni de lo uno ni de lo otro, además de que cada lector encontrará resonancias particulares, según sus intereses más directos. Sí diré que me ha parecido especialmente valiosa la visión integradora y positiva que ofrece el autor, muy razonadamente, del nuevo régimen administrativo de la dispensa.

Una de las cuestiones decisivas para el desarrollo de la doctrina canónica de derecho administrativo es, a mi juicio, la coherencia del sistema, o antes, si se quiere, la posibilidad misma de hablar de un sistema canónico de derecho administrativo. El Código de 1983, de modo particular en esta materia, presenta simultáneamente rasgos de novedad y de tradición. A la vez que introduce categorías jurídicas hasta ahora ausentes del derecho positivo de la Iglesia, como la de acto administrativo —que presupone la distinción de potestades, funciones y autoridades—, mantiene instituciones con una tradición densa y compleja; y las mismas normas de derecho administrativo son en parte de nuevo cuño, y en parte adaptación o reproducción de normas del Código anterior, que a su vez las había fijado decantando una tradición de siglos.

Por ese motivo, se puede temer fundadamente que la concurrencia, en el

derecho administrativo codicial, de algunos elementos y presupuestos conceptuales de nueva incorporación con instituciones ya existentes, de naturaleza discutida a lo largo de la historia, condiciona las posibilidades de integrar un sistema suficientemente armónico y coherente. En todo caso, resulta imprescindible repensar las instituciones tradicionales, con rigor técnico y perspectiva histórica, situándolas con competencia en las nuevas coordenadas del derecho vigente, para hacerse una idea apropiada del resultado de esa recíproca influencia entre tradición y renovación. Desde este punto de vista, la monografía de Eduardo Baura —por sus resultados, pero sobre todo por su método— me parece una aportación de gran calidad para la construcción del derecho administrativo canónico.

JORGE MIRAS

Teresa BLANCO, *La noción canónica de contrato. Estudio de su vigencia en el CIC de 1983*, EUNSA, Pamplona 1997, 269 pp.

En 1949 y 1952, respectivamente, dos maestros de la ciencia jurídica, Fuenmayor y Lombardía, se ocuparon del c. 1529 del Código de 1917, precedente del c. 1290 del vigente Código de 1983.

Era un texto legal importante, como lo es el actual. Merecía la pena fijar la atención en él. Y, por eso, nada de particular tiene que estos finos juristas lo hicieran. «El legislador eclesiástico —decía Lombardía—, en virtud del canon 1529 [ahora sería el c. 1290 del Código de 1983], remite a las leyes civiles del territorio. Pero difícilmente pueden ser

identificadas estas normas, si ignoramos cuáles son las relaciones jurídicas que el legislador quiere regular mediante este canon. (...) La fórmula que el legislador ha adoptado adolece de indudables dificultades interpretativas, que no han pasado por alto a la doctrina. (...) Los autores posteriores al Código, en sus Comentarios al texto del cuerpo legal canónico, apenas se enfrentan con estas dificultades y generalmente dedican al comentario de este canon apenas unas líneas, tan difíciles de entender como la fórmula legal misma» (cfr. la cita en las pp. 34-35 de la obra aquí recensionada).

Así las cosas, la autora de esta monografía, conectando sin duda con la mejor doctrina canónica, se plantea si existe una noción de contrato propia del ordenamiento canónico, con las consecuencias que esa noción puede tener en el conjunto del régimen codicial de los contratos (cfr. p. 15).

Digamos, de entrada, que la conclusión —sencilla, si se quiere, al contemplarla así, a primera vista, pero enormemente articulada y bien fundamentada a lo largo del estudio realizado— es afirmativa. «Parece claro —a la luz de la doctrina, de la praxis tanto administrativa como judicial de la Curia Romana, y de los supuestos que aparecen en el CIC vigente— que una buena definición de lo que el ordenamiento canónico entiende por contrato es la acuñada por Ulpiano para las convenciones: “duorum vel plurium in idem placitum consensus”. Ya se hable de *acuerdo*, *contrato*, *convenio*, o *convención*, en derecho canónico se puede calificar como *contrato*, a efectos de determinación del régimen jurídico de las relaciones resultantes, todo acuerdo de voluntades del que derivan obligaciones jurídicas para las partes» (p. 219).